



**S.J.: 72/2026**

Se ha recibido en este Servicio Jurídico, para su preceptivo informe, la propuesta de modificado nº 1 del Lote 1 del contrato de **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL.”** (Expediente A/SER-001735/2022).

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tenemos el honor de emitir el siguiente

## **INFORME**

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** A la citada petición de informe se acompaña la siguiente documentación:

- Escrito de alegaciones del contratista.
- Borrador de Orden de aprobación del modificado.
- Propuesta de modificación.
- Trámite de audiencia.
- Anuncio de la modificación propuesta.
- Orden de inicio de la modificación.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963929128365831809379**

**Segundo.-** Del informe propuesta remitido a este Servicio Jurídico, se extraen literalmente los hechos que a continuación se relatan:

*“Mediante orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de fecha 2 de agosto de 2022 se adjudica el contrato de ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL con un plazo de 48 meses.*

*Mediante Orden de 2 de septiembre de 2022, de corrección de errores materiales de la orden de 2 de agosto de 2022 por la que se adjudica el contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL, se corrige el plazo indicando que el plazo contractual es de 42 meses.*

*El 5 de noviembre de 2022 se levanta Acta de comprobación del replanteo de las obras de construcción de “AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA –CONDE DE CASAL” (Exp.: A/OBR-036452/2021) con fecha de comienzo de las obras de 7 de noviembre de 2022.*

*Como contrato complementario al contrato de obras, se licitó el CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL” LOTE 1 (Exp.: A/SER-001735/2022 LOTE 1), dividido en 2 lotes. El lote 1 comprende los servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud de las obras. El lote 2 comprende los servicios de Asistencia técnica de las obras.*

*El lote 1 de dicho contrato de servicios (Dirección de obra), se adjudica mediante Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de fecha 28 de diciembre de 2022 por un importe de 3.450.766,78 € I.V.A. incluido, y un plazo de 46 meses. (El plazo del contrato de obras de 42 meses, más UN (1) mes adicional para la recepción de las obras (fase 1) y TRES (3) meses adicionales a efectos de llevar a cabo los trabajos relativos a la medición general y certificación final de las obras (fase 2), y por tanto el plazo de ejecución total será de 46 meses, cuyo cómputo se iniciará el día siguiente al de la firma del contrato.*



*El CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL” LOTE 1 (Exp.: A/SER-001735/2022 LOTE 1) es firmado el 31 de enero de 2023.*

*Con fecha 8 de agosto de 2024 se firma contrato de modificación del contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL que contempla un incremento del plazo de las obras de 18 meses, pasando a ser el plazo total de las obras de 60 meses y la fecha de fin de la obra el 6 de noviembre de 2027. Mediante Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras de fecha 17 de agosto de 2023, se autoriza la redacción de la modificación del proyecto del contrato de “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL”*

*Mediante orden de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 29 de enero de 2026, se aprueba técnicamente el PROYECTO MODIFICADO N° 2 DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL”.*

*Mediante orden de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de fecha 25 de febrero de 2026, se aprueba la prórroga del contrato de servicio denominado “CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL”. EXPEDIENTE A/SER-001735/2022 LOTE 1.*

*El objeto es la modificación del lote 1 del contrato de servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras de “Construcción de ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid. tramo: Plaza Elíptica – Conde de Casal” (Exp.: A/SER-001735/2022 lote 1).*

*La modificación consiste en la adaptación de los medios materiales y de los recursos humanos necesarios en el contrato para dar cumplimiento al apartado “3.2.2. Fase 1 o de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica, durante la ejecución de las obras” del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES*



*(PPTP), conforme al PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL”.*

*Esta modificación contiene 22 modificaciones no previstas en pliego sin aumento de plazo en la ejecución de la obra, lo que implica la necesidad de adaptar los medios materiales y humanos del contrato de servicios a los trabajos a ejecutar en el contrato de obra”*

**Tercero.-** Se ha concedido trámite de audiencia al contratista, quien ha manifestado su conformidad con la modificación propuesta.

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS

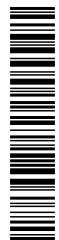
**Primera.-** Procede, en primer lugar, determinar el régimen jurídico aplicable al expediente de modificación.

A tenor de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), apartados 1 y 2:

*“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.*

*2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.*

El contrato analizado se adjudicó el 28 de diciembre de 2022; por tanto, el régimen jurídico aplicable al presente modificado será el previsto en la vigente LCSP.



**Segunda.-** La legislación de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP:

*“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”.*

La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una separación del principio básico en materia contractual de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987). Constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración de los principios que rigen la licitación pública.

Así, y como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser precisamente en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. Se advierte igualmente que tal facultad debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos (Dictámenes de 10 de septiembre de 1998, 5 de diciembre de 1984 y 24 de julio de 2003), todo ello, por cuanto un uso



indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas.

**Tercera.-** El régimen jurídico de modificación de los contratos del sector público se contiene fundamentalmente en los artículos 203 y siguientes LCSP, el primero de los cuales, señala:

*“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.*

*2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:*

*a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;*

*b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.*

*En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.”.*

En consecuencia, en sede de modificación contractual, la LCSP distingue en función de que dicha modificación esté prevista o no en el pliego; en el primer caso, se regirá por el artículo 204, mientras que en caso de que no esté prevista, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 205.



El contrato que pretende modificarse, además de ser un contrato de servicios tiene la naturaleza de ser un contrato complementario de otro principal, lo que exige el estudio siquiera someramente de esta figura.

Los contratos complementarios se encuentran definidos en el artículo 29, apartado séptimo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyo tenor literal es el siguiente:

*“Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal”*; esto es, aquellos contratos de servicios o suministros vinculados necesariamente a la correcta ejecución de un contrato de obra, denominado por la LCSP como principal.

De esta forma, podríamos destacar que los contratos complementarios se caracterizan por:

- a) Estar intrínsecamente ligados a un contrato principal de obras o de suministros. De hecho, es causa de extinción de este tipo de contratos la resolución del principal (*ex* artículo 313.1 c) LCSP).
- b) Su objeto está vinculado al correcto desarrollo y ejecución de las prestaciones propias del contrato principal.
- c) Su plazo de vigencia o duración quedará fijado por la duración del contrato principal, incluso en el supuesto de que se superen los plazos legales previstos para los contratos de servicios.

Hemos de puntualizar que no debe confundirse a los contratos complementarios con las obras complementarias que pudieran acordarse durante la ejecución de un contrato “principal” de obra; dado que los contratos complementarios tienen sustantividad propia, existencia y fin individual, diferente del contrato principal, mientras que las obras complementarias son meras prestaciones accesorias de un contrato ya existente en el que se integran, quedando sometidas plenamente a su régimen jurídico.





La nota fundamental de los contratos complementarios es la especial dependencia que ostentan respecto del contrato principal. Por ello, cualquier modificación que sufra el principal podría producir la correspondiente alteración en el contrato complementario.

Las modificaciones que pueden darse en cualquier tipo de contrato administrativo están reguladas en los **artículos 203 a 207 de la LCSP**, que distinguen entre modificaciones previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y aquéllas no previstas en el mismo, constitutivas de: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

Sentado cuanto antecede, es preciso señalar que la alteración de un contrato principal podrá o no afectar al contrato de servicios complementario, para ello habrá que estudiar en cada caso concreto el alcance de la modificación y sus cláusulas para conocer su influencia y su posible extensión al complementario.

En síntesis, podemos afirmar que la modificación del contrato de obra es un presupuesto necesario, pero no suficiente, para que resulte procedente, por consecuencia, la modificación de los contratos complementarios, debiendo concurrir además los requisitos y procedimientos aplicables a los modificados según la normativa aplicable al contrato de servicios complementario.

Particularmente, sobre la necesidad de proceder a modificar un contrato de dirección de obras, en virtud de su condición de contrato complementario al de un contrato principal de ejecución de obras - para adecuarlo a la realidad fáctica y jurídica-, en sede de ejecución del contrato de obras principal, resulta ilustrativo el Dictamen número 437/2013, de 24 de septiembre del Consejo Consultivo de Extremadura, en cuya virtud:

*“(...) En el presente asunto, la modificación del contrato que se propone resulta necesaria por ser consecuencia de la modificación del contrato de obra de "Autovía autonómica EX-Al. Tramo: Coria - Moraleja Este"(expediente OBR0508037), (...).”*





**Cuarta.-** En el caso que nos ocupa, dado que el pliego regidor de la contratación no preveía modificaciones en su clausulado, debemos acudir al art 205 LCSP, que es el que aquí interesa, a cuyo tenor:

*“1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:*

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.*
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.*

*2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:*

***a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:***

*1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.*

*En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.*

*2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*



***b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:***

*1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*

*2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*

*3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

***c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.***

*Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:*

*1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.*

*2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.*



*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.*

*3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:*

*(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.*

*(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación”.*

Según data del informe propuesta suscrito por la Subdirección General de Proyectos y Construcción, que ha sido en parte reproducida en el primer antecedente de hecho del presente dictamen, este Servicio Jurídico puede concluir que las modificaciones propuestas cumplen los requisitos exigidos en el artículo 205.1 LCSP, pues encuentran su justificación en el supuesto previsto en el apartado 2.b) del mismo precepto.

En efecto, tal y como se desprende de la meritada memoria:

*“1.º La modificación propuesta viene derivada de la aprobación de un modificado del contrato principal con 22 causas de modificación no previstas, sin aumento de plazo. Causa o circunstancia que una Administración diligente no hubiera podido prever. Si bien es previsible que en un contrato de obras pueda haber modificaciones, en el momento de la licitación del presente contrato de servicios resultaba imposible prever la naturaleza y el real alcance de las posibles modificaciones no previstas que eventualmente puedan acabar resultando necesarias en el contrato de obras, y por tanto la repercusión de tales modificaciones en el contrato de servicios.*



*2.º La modificación no altera la naturaleza global del contrato, dado que la prestación es la misma que la inicial, pero con una adaptación de medios materiales y de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento y llevar a cabo las prestaciones establecidas en pliego prescripciones técnicas de acuerdo a las necesidades establecidas por la aprobación del modificado número 2 del contrato de obra.*

*3.º La modificación propuesta supone un 11,93% (411.610,55 €, IVA incluido) respecto al precio inicial del contrato (3.450.766,78 €) no excediendo, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

*Esta modificación se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.”*

En la propuesta de resolución se hace referencia a la modificación tercera del Lote 2, sin embargo, estamos ante la modificación primera del Lote 1, por lo que debe corregirse dicha errata.

**Quinta.-** En relación con el procedimiento a seguir, como indica la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid (por todos, sus Dictámenes de 29 de octubre de 2015 y de 25 de septiembre de 2013), la normativa procedimental a aplicar debe ser la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de interpretación, modificación y resolución, por aplicación de las disposiciones transitorias del Código Civil, erigidas en derecho intertemporal común. En idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en sus Dictámenes 3062/1998 y 975/2002, así como el Dictamen 328/2012, de 27 de diciembre, del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

Así, el artículo 191 LCSP, dentro del capítulo relativo a las prerrogativas de la Administración Pública, regula el procedimiento de ejercicio de estas prerrogativas, señalando:

*“1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.*



*2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.*

*3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:*

*a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.*

*b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.*

*c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.*

*4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”.*

Consta en el expediente el cumplimiento del trámite de audiencia concedido al contratista, así como la conformidad del mismo suscrita con fecha 17 de abril de 2026.

Además, habrá de tenerse en cuenta, como señalan los Dictámenes 511/12 y 515/12, de 19 de septiembre de nuestro órgano consultivo, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la normativa contractual, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).



En virtud de lo expuesto, procede emitir la siguiente

### **CONCLUSIÓN**

El proyecto de Resolución de modificación sometido a Informe **merece el parecer favorable** de este Servicio Jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en el cuerpo del presente dictamen.

Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

LA LETRADA JEFE-ADJUNTA EN LA CONSEJERÍA DE  
VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Firmado digitalmente por: GÓMEZ CUERDA MARÍA PALOMA  
Fecha: 2026.05.08 12:05

Fdo.: Paloma Gómez Cuerda

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963929128365831809379**